

C.A. de Temuco

Temuco, seis de mayo de dos mil veinticinco.

VISTOS

En causa RIT N° O-17-2024 Caratulados “BORQUEZ CON MUNICIPALIDAD DE CARAHUE”, RIT O-17-2024, con fecha 27 de septiembre de 2024 se dictó sentencia cuyo contenido en lo resolutivo es del siguiente tenor:

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley 3.500; 1 y 2 de la Ley 19.728; 1698 del Código Civil; y 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 58, 63, 67, 68, 69, 73, 172, 445, 446 y siguientes del Código del Trabajo; y demás normas pertinentes; SE DECLARA:

I.- Que se acoge la demanda incoada por MICHELLE FRANCISCA BORQUEZ INOSTROZA, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CARAHUE, solo en cuanto se declara que entre las partes existió una relación laboral entre el 20/01/2019 y hasta el 30/04/2024 y que el despido de la demandante es injustificado, condenándose, en consecuencia, al demandado al pago de las siguientes prestaciones, por los montos que en cada caso se indican:

1.- La cantidad de \$1.308.105.-, por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo.

2.- La suma de \$6.540.525.- por concepto de indemnización por 5 años de servicios.

3.- La cantidad de \$3.270.263.- por concepto del recargo del 50% de la indemnización por años de servicio.

4.- Las sumas de \$4.970.742.- por feriado legal y feriado proporcional periodo 2024, por la suma de \$146.666.-

5.- La demandada deberá, además, enterar el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas a AFC Chile S.A. en las condiciones señaladas en el motivo décimo de esta sentencia.

Que las demás sumas antes indicadas deberán ser pagadas con más los intereses y reajustes contemplados en los artículos 63, 173 del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVPZXUWGPQX

Código del Trabajo, según corresponda.

II.- Que se desestima en lo demás la referida demanda.

III.- Que no se condena en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida.

En contra de esta sentencia se alza de nulidad don ADOLF TOPP CRUCES por la demandada en causa sobre despido injustificado, caratulada “BORQUEZ CON MUNICIPALIDAD DE CARAHUE”, RIT O-17-2024, quien dice:

Que dentro de plazo, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 477 del 9 Código del Trabajo, vengo en interponer fundado recurso de nulidad respecto de la sentencia definitiva dictada por S. S. con fecha 27 de septiembre de 2024 (en adelante, la sentencia recurrida), en virtud de los antecedentes de hecho y de Derecho que paso a exponer:

En efecto, la sentencia dictada por S. S., en opinión de esta parte, ha sido dictada con infracción de ley, lo que hace necesario dictar la correspondiente sentencia de reemplazo. A su vez, esta infracción de ley, ha influido sustancialmente en la parte dispositiva de la sentencia.

I.- Antecedentes preliminares y esquema del recurso:

Para efectos de seguir un orden en la redacción del recurso de nulidad se hará una relación breve del caso, así como de los hechos probados en relación a la causal de nulidad interpuesta; luego, se procederá al análisis de la causal de nulidad propiamente tal, y en cómo este vicio ha influido en la parte dispositiva de la sentencia.

Relación breve del caso:

Mi representada la Municipalidad de Carahue fue demandada, a objeto de que se declarará la declaración de existencia y continuidad laboral, despido injustificado, y cobro de prestaciones laborales.

En la contestación, esta parte argumentó que la acción intentada por la contraparte es improcedente al carecer del derecho para obtener la satisfacción de las pretensiones contenidas.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVPZXUWGPQX

FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE LA DEMANDADA
Y DE INEXISTENCIA DE CONTRATO DE TRABAJO Y DE
RELACIÓN LABORAL ENTRE EL DEMANDANTE Y LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CARAHUE:

Tal como consta de la resolución exenta 23 de fecha 21 de enero de 2022, el SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, quien es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, celebró un convenio con mi representada para efecto de cumplir los fines propios de su institución pública en beneficio de la comunidad.

Hago presente que de acuerdo al artículo 8° transitorio de la ley 21.302, mientras no exista un sistema de protección administrativa, cualquiera sea su denominación legal, las referencias al órgano de protección se entenderán realizadas a las oficinas de protección de derechos del niño, niña o adolescente (OPDE). EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONVENIO se establece el monto anual que el servicio entrega a la municipalidad para efecto de realizar el pago de los servicios de los profesionales, esto es, \$60.682.455 y de mantención de inmueble y gastos propios del programa. En este orden, la profesional demandante si bien celebró un contrato de prestación de servicios con la Municipalidad, no es menos cierto, que esto obedecía a la implementación de un programa de gobierno en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, donde el SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA es en definitiva el servicio:

- A- Realizaba el pago de los servicios profesionales.
- B- B- Determinaba las obligaciones a cumplir por parte de cada profesional.
- C- Realizaba las supervisiones, es decir, son ellos los mandantes del programa, limitándose solamente la municipalidad a



celebrar un contrato de prestación de servicios.

Desde esta perspectiva la acción incoada debió necesariamente ser deducida en contra SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA y bajo ningún respecto en contra de la Municipalidad de Carahue.

D- Con la implementación de la Oficina Local de la Niñez se crea un Sistema de Garantías y Protección Integral de derechos de la niñez y adolescencia, quedando sin efecto la denominada OPD, llamando el servicio a nuevos concursos, suprimiendo profesionales tales como abogados y estableciéndose una nueva reestructuración. En este marco, la OLN es la institución encargada de la promoción de derechos, la prevención de situaciones de riesgo y vulneraciones, y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá establecer Oficinas Locales de la Niñez (OLN) con competencia en una comuna o agrupación de comunas en todo el país. Las OLN serán las encargadas de la protección administrativa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La coordinación y supervisión de las Oficinas Locales de la Niñez corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez. Las Oficinas Locales de la Niñez se implementarán de manera progresiva en el territorio nacional, a partir de la transformación de las Oficinas de Protección de Derechos. En síntesis, la demandante debió haber presentado su demanda en contra del Ministerio de Desarrollo Social.

II.- REFLEXIONES EN TORNO A LA EXISTENCIA DE CONTRATOS A HONORARIOS SUCESIVOS Y LA IMPOSIBILIDAD DE TORNAR EN CONTRATOS DE TRABAJO BAJO SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA. La llamada teoría de los actos propios se fundamenta en la buena fe que debe existir entre las partes de toda relación contractual, dentro de la cual se incluye, naturalmente, la prestación a honorarios objeto de esta litis. Según esta doctrina "la conducta contraria es una contravención o una



infracción del deber de buena fe. Ya que el hecho de que una persona trate, en una determinada situación jurídica, de obtener la victoria en un litigio, poniéndose en contradicción con su conducta anterior, constituye un proceder injusto y falta de lealtad. He aquí donde la regla, según la cual, nadie puede ir en contra de sus propios actos, se anuda estrechamente con el principio de derecho que manda comportarse de buena fe en las relaciones jurídicas". Finalmente, el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho y ese acto contradictorio provoca la inadmisibilidad de la pretensión cuando el sujeto pasivo ha modificado su situación por la confianza que ha despertado en él la conducta vinculante. En este sentido, la legislación laboral no puede considerarse aislada del ordenamiento jurídico general, ni menos, el principio de buena fe. En consecuencia, el juez laboral no puede desatender la voluntad de las partes que han decidido libremente NO vincularse laboralmente. En virtud, de lo anterior, y según se desprende de los hechos expuestos por el mismo demandante y que han sido ratificados por esta parte, el actor celebró variados contratos de honorarios con la I. Municipalidad de Carahue, sin jamás manifestar de forma alguna su disconformidad con esa forma de contratación. De ello se desprende su voluntad definida y persistente de mantener en el tiempo el mismo tipo de vinculación, sumado a su pasividad y silencio en orden a ejercer algún tipo de reclamo. En fallo, de fecha 4 de noviembre de 2008, rol 5129- 2008, la Excma. Corte Suprema señaló lo siguiente "Que, al efecto, resulta pertinente señalar que en la demanda se reconoce por la actora haber trabajado para la Universidad Mayor cerca de seis años mediante la modalidad de prestación de servicios a honorarios, lo que importa la aceptación por parte de ésta de la situación descrita en forma reiterada y mantenida en el tiempo, lo que se exteriorizó a través de la emisión de las respectivas boletas de honorarios. Tras este comportamiento, denominado por la doctrina como "de los actos propios" subyace sin duda la primacía del principio



de la buena fe, del cual se encuentra imbuido no sólo la legislación laboral, sino que todo nuestro ordenamiento jurídico." Y agrega este fallo: "Que, de acuerdo a las máximas de la experiencia, la aceptación antes descrita por parte de un profesional informado, importa un indicio grave de que la prestación de servicios de que se trata, ha tenido la naturaleza que las partes le han otorgado, en este caso, prestación de servicios profesionales a honorarios". Finalmente, en una redacción similar, la misma Excma. Corte Suprema ha sostenido que: "...en tomo al asunto en estudio, una reflexión especial merece el número de 19 "contratos de prestación de servicios" celebrados entre las partes durante aproximadamente 4 años y que denotan la voluntad definida y persistente de éstas de mantener en el tiempo el mismo tipo de vinculación, lo que permite, como lo ha dicho el Tribunal Supremo, recurrir a la denominada Teoría de los Actos Propios, basada en la noción que a nadie le es lícito ir contra sus propios actos anteriores que expresan la voluntad del sujeto y definen su posición jurídica en una materia determinada y que se funda, en el último término, en el principio más general de la buena fe, la que, ciertamente, tiene plena cabida en el ámbito laboral de que se trata, pues como reiteradamente lo ha decidido esta Corte, la legislación laboral no puede considerarse en forma aislada del ordenamiento jurídico general, que regula las vinculaciones que generan los sujetos y que, en el caso, se ha traducido en la aceptación por parte del demandante de la existencia de una relación de naturaleza civil con sus respectivas consecuencias, durante más de quince años, sin haber formulado reclamo alguno en tal sentido".

III. IMPROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN DEL ARTÍCULO 162 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO Y PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES PARA CASOS COMO EL SUBLITE EN QUE SE DISCUTE LA EXISTENCIA DE UNA RELACION LABORAL.

Que, en cuanto a la aplicación de la sanción contenida en el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVPZXUWGPQX

inciso 7° del artículo 162 del Código del Trabajo, nuestra Corte Suprema ha indicado que no resulta procedente al caso de autos. Sin embargo, debe dicha conclusión variar cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado – entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575–, pues en tales casos, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción en comento, cual es que ellos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios, la existencia de una relación laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo. Que, por otro lado, la aplicación de la sanción referida, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector, base sobre la cual, también debe desecharse el recurso de nulidad del actor. A mayor abundamiento, así se ha resuelto por la Excelentísima Corte Suprema conociendo de sendos recursos de unificación de jurisprudencia, siendo ésta la tesis actualmente sustentada por dicho tribunal, a modo ejemplar en causas Rol 39621-2017y 37339- 2017.

IV. LEY QUE CONCEDE EL RECURSO. La ley que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVPZXUWGPQX

concede el presente recurso de nulidad está contenida en el artículo 477 Código del Trabajo.

v. PRIMERA CAUSAL: La primera causal que se invoca es la que establece el artículo 477 del Código del Trabajo, por dictación de la sentencia con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación a los artículos 7 del referido Código y 4 de la Ley N° 18.883 y ley 21.133 en relación al pago de cotizaciones. Esta disposición reconoce expresamente la procedencia del recurso de nulidad respecto de la infracción de ley, cuando este vicio se produce al momento de dictar la sentencia. La sentencia que se recurre, por este acto, ha sido pronunciada con infracción manifiesta de ley con la consiguiente influencia sustancial en lo dispositivo del fallo. El vicio específico de la sentencia consistió precisamente en que la sentencia que se denuncia como nula en esta parte, dio lugar a la demanda laboral en todas sus partes infringiendo lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 18.883, en el entendido de condenar a la Municipalidad de Carahue, teniendo en conocimiento que es por modificación de la institución SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA quien llamó a nuevos concursos. Se puso término a la antigua institución Sename, no siendo responsabilidad de la Municipalidad esta reestructuración.

En este sentido, no existe legitimación pasiva de la municipalidad para ser demandada.

Por su parte, el legislador permite la contratación bajo la figura de honorarios y excepcionalmente la del Código del Trabajo. A su turno, la sentencia es nula en toda aquella parte que condena a la Municipalidad de Carahue al pago de las cotizaciones previsionales en primer lugar a la luz de la ley 21.133, norma legal que modifica las normas para incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social, la cual comenzó a regir el día 2 de febrero de 2019. En este entendido, al condenar a mi representada al



pago de las cotizaciones se generaría un doble pago ya que el demandado por la propia disposición legal a enterado durante estos años sus cotizaciones a la luz de la norma vigente.

EN SUBSIDIO En cuanto a la causal de infracción a las reglas de la sana crítica: Que, en subsidio, se interpone la causal de anulación del artículo 478, letra b) del Código del Trabajo, esto es, por dictación de la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Argumenta que se infringe en el fallo la regla de la lógica de la razón suficiente, para lo que sostiene

VI. INFLUENCIA SUSTANCIAL DEL VICIO EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO. Al infringir el artículo 4 de la ley 18.883, este yerro de manera sustancial en la parte dispositiva de la sentencia, porque de haber considerado que el vínculo contractual con el demandante fue a la luz de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 18.883 el Tribunal necesariamente debió haber rechazado la demanda de autos.

PERJUICIO IRROGADO A ESTA PARTE (AGRAVIO) Y RELEVANCIA.

El agravio (esto es, la diferencia entre lo pedido y lo otorgado) y el subsecuente perjuicio irrogado a esta parte por la concurrencia de la causal legal ya descrita es manifiesta; se obliga mediante la sentencia a pagar una suma de dinero.

VI. PREPARACIÓN:

Este recurso no requiere preparación por haberse producido el vicio al tiempo de dictarse la sentencia definitiva. POR TANTO, En virtud de lo establecido por los artículos artículo 4 de la ley 18.883 y 477 y siguientes del Código del Trabajo, y demás normas aplicables y pertinentes, solicito a S. S. tener por interpuesto fundado recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 27 de septiembre de 2024, someterlo a tramitación, declararlo admisible y elevar estos autos para ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVPZXUWGPQX

Temuco, la que, conociendo del mismo y de los vicios alegados, invalide la sentencia definitiva atacada de nula dictando la correspondiente sentencia de reemplazo, en la cual se declaren las siguientes peticiones concretas, especialmente que se rechace la demanda laboral en todas sus partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO

PRIMERO: La primera causal que se invoca es la que establece el artículo 477 del Código del Trabajo, por dictación de la sentencia con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación a los artículos 7 del referido Código y 4 de la Ley N° 18.883 y ley 21.133 en relación al pago de cotizaciones. En subsidio, se interpone la causal de anulación del artículo 478, letra b) del Código del Trabajo, esto es, por dictación de la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

SEGUNDO: Que en relación a la primera causal señalada en su recurso, refiere que ella se materializa desde el momento en que los artículos 7 del referido Código y 4 de la Ley N° 18.883 y ley 21.133 en relación al pago de cotizaciones. Estas disposiciones reconoce expresamente la procedencia del recurso de nulidad respecto de la infracción de ley, cuando este vicio se produce al momento de dictar la sentencia. La sentencia que se recurre, por este acto, ha sido pronunciada con infracción manifiesta de ley con la consiguiente influencia sustancial en lo dispositivo del fallo. El vicio específico de la sentencia consistió precisamente en que la sentencia que se denuncia como nula en esta parte, dio lugar a la demanda laboral en todas sus partes infringiendo lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 18.883, en el entendido de condenar a la Municipalidad de Carahue, teniendo en conocimiento que es por modificación de la institución SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA quien llamó a nuevos concursos. Se puso término a la antigua institución Sename, no siendo responsabilidad de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVPZXUWGPQX

Municipalidad esta reestructuración.

En este sentido, no existe legitimación pasiva de la municipalidad para ser demandada.

Por su parte, el legislador permite la contratación bajo la figura de honorarios y excepcionalmente la del Código del Trabajo. A su turno, la sentencia es nula en toda aquella parte que condena a la Municipalidad de Carahue al pago de las cotizaciones previsionales en primer lugar a la luz de la ley 21.133, norma legal que modifica las normas para incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social, la cual comenzó a regir el día 2 de febrero de 2019. En este entendido, al condenar a mi representada al pago de las cotizaciones se generaría un doble pago ya que el demandado por la propia disposición legal a enterado durante estos años sus cotizaciones a la luz de la norma vigente.

TERCERO: Que en relación a esta alegación, el sentenciador en su conclusión refiere a partir del considerando sexto lo siguiente “ Que, de acuerdo al examen de las probanzas aportadas en juicio, y lo establecido en función de ella en el considerando que antecede, se logra demostrar por la demandante los signos de laboralidad, esto es la subordinación y dependencia. En efecto los servicios prestados por la demandante no se encuadran en lo preceptuado en el artículo 3 de la Ley 18.883 sino que las labores prestadas por la actora a la demandada en todo caso sí cumplen las características establecidas en el artículo 7 del código laboral, y la única forma de desprenderse de tal carácter de laboralidad sería cumpliendo expresamente lo que dispone el artículo 4 de la Ley 18.883, toda vez que al estar establecido por ley la forma de contratación y regulación del personal que desempeña funciones en un municipio, las mismas deben enmarcarse en dicha normativa, lo que en este caso en particular no acontece en ninguna de las hipótesis contempladas en el artículo 4 . En efecto, respecto a la primera hipótesis, contenida en su inciso 1º , esto es, la contratación a honorarios de profesionales y técnicos de educación superior, ello se



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVPZXUWGPQX

puede realizar cuando se trate de “labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde”, requisito que de ninguna manera se cumple en el presente caso, conforme lo que se viene razonando, ya que los servicios que la demandante prestaba para la demandada, no eran ni accidentales y menos no habituales, por cuanto se trataban de labores desplegadas mediante la asistencia diaria y evacuando informes sobre su gestión, los cuales, ordenados exhibir, no fueron desconocidos, pero refiere la demanda que no fueron encontrados, lo que permite suponer que en este punto lo alegado por la actora es cierto, cuestión además que está corroborada por la prueba testimonial que da cuenta de lo mismo. Que, respecto a la segunda hipótesis del artículo 4 precitado, esto es, que “se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales”, tampoco se configura, fundamentalmente porque las funciones desarrolladas por la demandante no daban cuenta de cometidos “específicos”, sino que incluso como se advierte de los propios contratos a honorarios y de “los informes de gestión solicitados incluso en los contratos a honorarios para el pago correspondiente, en consecuencia se puede concluir que se trataba de labores habituales, permanentes y generales de recepción de documentación, emisión de oficios y respuestas vía correo electrónico, visitas domiciliarias. Labores que no revisten el carácter de esporádicas y conforme a lo establecido en el artículo 8º del Código del Trabajo “Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo”, motivos por los cuales cabe concluir que el vínculo que unió a las partes desde el 20/01/2019 al 30/04/2024, fue bajo subordinación y dependencia, razón por la cual se hace lugar a la demanda en cuanto se pide declarar tal existencia de relación laboral”.

CUARTO: Que tal como se ha dicho en múltiples ocasiones la infracción legal tiene lugar no sólo cuando el juez ha contravenido formalmente el tenor de la norma, fallando en oposición al texto



expreso, sino también, cuando ha hecho una falsa aplicación de su contenido, cuando la ha aplicado a un caso no regulado por la norma, cuando ha prescindido de la aplicación de la ley para los casos en que ella se ha dictado y, finalmente, cuando ha hecho una errónea interpretación de ella, dándole un alcance diverso a aquél que debió concederle de haber mediado una ajustada aplicación de los artículos 19 a 24 del Código Civil.

De esta manera, esta causal supone la total aceptación de los hechos establecidos en la sentencia por parte del recurrente, impidiendo pedir su modificación e imposibilita a esta Corte de revisarlos, de manera que estos son inamovibles, pues la objeción se refiere al aspecto puramente jurídico del asunto, quedando limitada la alegación a demostrar una errónea aplicación de la ley.

QUINTO: Que conforme lo anterior y teniendo presente lo razonado por el sentenciador, es posible concluir que este no ha contravenido el texto de la norma, tampoco hizo una falsa aplicación de la misma, la aplicó al caso que ella regula, así como tampoco ha hecho una errónea interpretación de la misma, en definitiva le dio el alcance que la norma tiene.

En este orden de ideas lo concluido por el juez es correcto, conforme la norma que lo regula, ya que en el caso concreto si bien existe la norma citada por el recurrente, ella debe aplicarse en armonía con las normas laborales, particularmente con la realidad que existe en las diferentes relaciones laborales. En este orden de ideas una norma no puede ser el medio para impedir la aplicación de las normas laborales que se sustentan sobre las normas establecidas en el Código del Trabajo, una de las cuales es la teoría de la realidad, que en el caso concreto lleva al sentenciador que no obstante la norma que sirve de base para contratar al demandante, lo real es que el trabajador reúne todos y cada uno de los elementos que se reconocen en una relación laboral y conforme ello acoge la demanda.

Motivo por el cual esta causal será rechazada.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVPZXUWGPQX

SEXTO: Que en subsidio de la causal antes desarrollada, esta es la del 478 letra b) en cuanto, la dictación de la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Argumenta que se infringe en el fallo la regla de la lógica de la razón suficiente.

SEPTIMO: Que respecto de esta causal, el recurrente solo la menciona sin desarrollarla, carece de fundamentación, motivo por el cual esta causal será rechazada y consecuentemente lo será el recurso, de la forma que se dirá en lo resolutivo de la sentencia.

Y teniendo presente, además, los artículos 474 y siguientes, 477, 478 letra b del Código del Trabajo, se declara, que **SE RECHAZA SIN COSTAS**, recurso de nulidad interpuesto por el abogado don **ADOLF TOPP CRUCES** en representación de la **I. MUNICIPALIDAD DE CARAHUE**, en contra de la sentencia de fecha 26 de septiembre de 2024, dictada por don Elías Gabriel Agüero Matamala, Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Carahue en causa caratulada “**BORQUEZ CON MUNICIPALIDAD DE CARAHUE**”, RIT O-17-2024; RUC 24- 4-0583155-0; la que en consecuencia no es nula.

Redacción del abogado integrante Reinaldo Osorio Ulloa.

Regístrese y devuélvase en su oportunidad.

NºLaboral - Cobranza-576-2024 (pvb).



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVPZXUWGPQX

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por su Presidenta Ministra Sra. Cecilia Aravena López, Fiscal Judicial Sr. Óscar Viñuela Aller y abogado integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa. Se deja constancia que el abogado integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa, no firma la sentencia que antecede, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.

En Temuco, a seis de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QVPZXUWGPQX